

**VII Congreso Latinoamericano de Estudios del Trabajo: el trabajo en el siglo XXI.
Cambios, impactos y perspectiva.**

**GT No. 15 – Conflictividad laboral, sindicalismo y movimientos sociales en América
Latina en el siglo XXI**

**Lecciones y experiencias de las transnacionales mineras en el marco de los estándares
internacionales determinados por la Organización Internacional del Trabajo**

Francisco Rafael Ostau de Lafont de León

Lecciones y experiencias de las transnacionales mineras en el marco de los estándares internacionales determinados por la Organización Internacional del Trabajo

Resumen simple: Analizar la responsabilidad social de algunas empresas transnacionales del sector carbonífero que han venido invirtiendo en este sector de la economía colombiana desde los estándares determinados por la Organización Internacional del Trabajo y la OCDE constituye unos de los puntos de partida para el análisis del trabajo en el siglo XXI.

A pesar de la importancia que reviste la minería para la economía del país, el impacto que puede tener la explotación minera carbonífera, requiere de un Estado sólido, que tenga control sobre los efectos negativos ambientales y sobre la vigilancia de los derechos humanos. Pese a ello, Colombia se caracteriza por ser un Estado débil o un Estado en crisis¹ frente a los actores privados. Esta debilidad se manifiesta en la ausencia de control o gobernanza, tanto en el mundo del trabajo como en el impacto ambiental y en la protección de los derechos humanos, que está dominado por los agentes sociales quienes tienen la obligación de aplicar la normatividad.

Se ha demostrado cómo los actores sociales (empresas nacionales y multinacionales mineras), han participado a su favor, en la expedición de leyes y normas² y cómo funcionarios del Estado, una vez dejan los cargos que tienen como objeto el control o la gobernanza, pasan a ser funcionarios de los actores sociales que han controlado, o viceversa. La inversión minera en el sector carbonífero colombiano es un elemento importante en el desarrollo del país. El Estado colombiano es un Estado débil que ha sido menguado desde las políticas económicas neoliberales (Cesde, 2009; Suárez, 2010), con el objeto de hacer prevalecer el mercado sin control. La importancia en el desarrollo económico del sector minero carbonífero, obliga al Estado a ejercer un mayor control y fortalecer la gobernanza alrededor de los derechos humanos del mundo del trabajo y del manejo medioambiental.

¹ “(...) la globalización ha traído consigo un incremento de las desigualdades y de la inseguridad económica y, como consecuencia de ello, un debilitamiento adicional de los Estados frágiles (...) otro factor que puede contribuir al proceso de desintegración de un Estado y también a la aparición de conflictos armados, son los intereses económicos relacionados con los recursos naturales” (Fernández, 2009: 116).

² Ley 685/01 del 5 de agosto. Por medio de la cual se expide el Código de minas.

Objeto: Realizar un estudio acerca del tratamiento de los Derechos Humanos en el marco de la responsabilidad social de algunas empresas transnacionales del sector carbonífero en Colombia como el caso de la Drummond. Para tal efecto, se tomará como indicadores los derechos humanos en materia del mundo del trabajo, el impacto ambiental y el análisis de la conflictividad social.

Objetivo: Establecer el impacto que producen las empresas del sector carbonífero transnacional en Colombia frente al tratamiento de los derechos humanos.

Metodología: Se hará uso de la metodología socio-jurídica y, en este caso, se empleará la metodología de marcos o análisis de los marcos (Chihu, 2006), concepto acuñado por Erving Goffman (2003), quien lo explica como un esquema de interpretación que permite percibir, identificar, etiquetar y definir situaciones dentro de un espacio de vida y el mundo en general. Igualmente, se aplicará la metodología de casos (Yacuzzi, s. f.) como herramienta de investigación en las ciencias sociales que coadyuva a realizar un análisis sobre la base de realidades que son conceptualizadas en el campo teórico; y emplear argumentos que, en el caso de las ciencias sociales, nos conectan con la realidad del análisis desde el caso seleccionado (Watkins, 1991; Guarnizo, Mejía y Durán, 2009).

Resultados: En los últimos años se ha venido profundizando la llamada responsabilidad social empresarial en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, de las Naciones Unidas, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y en el caso colombiano, de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Cámara de Asomineros –que ha establecido un código de conducta para las empresas del sector minero– Medir la responsabilidad social empresarial es establecer estándares internacionales que puedan ser medidos y, para el efecto de la metodología de casos se han escogido los siguientes estándares planteados por las organizaciones mencionadas: a) el cumplimiento de la normatividad laboral; b) el impacto en la seguridad industrial en los trabajadores de la empresa; c) el análisis del impacto ambiental y biodiversidad, y d) el análisis de la generación de conflicto social en la zona de influencia.

Del análisis del papel de la gobernanza del Estado colombiano, se puede señalar que en el sector minero colombiano hay una gobernanza débil, toda vez que en el caso de la empresa Drummond muchos de los elementos negativos que se han demostrado en el presente documento no han tenido prevención ni vigilancia de las instituciones del Estado colombiano que tienen función directa o indirecta sobre los estándares analizados en el presente documento del mundo del trabajo, del impacto ambiental y de la conflictividad social del área de influencia de esta empresa. Lo anterior se convierte en una prueba en términos generales de lo que podría estar sucediendo en los países de América Latina y la gobernanza en el sector minero. Se podría decir que el mercado ha tomado la delantera en las políticas públicas y el Estado ha venido perdiendo el poder de gobernar la economía (Levi, 2011).

El análisis del caso Drummond demuestra una alta conflictividad en materia del mundo laboral, tanto en la aplicabilidad de la norma como en el impacto de la salud ocupacional, y se establece un alto impacto ambiental en las zonas de desarrollo minero. Si a esto se le agrega que el Estado colombiano, como diría Juan Gabriel Tokatlian (2009) es un Estado fallido, y frente a este concepto solicitar la aplicación efectiva de los convenios de gobernanza de la OIT sobre inspección del trabajo³, política de empleo y consulta tripartita, significaría que el Estado colombiano tendría la capacidad de controlar la aplicabilidad de las normas en el mundo del trabajo, incluido el impacto ambiental y la violencia social.

Es necesario destacar que alrededor del caso de la empresa Drummond Ltda., hay muchas afirmaciones que requieren ser investigadas, dado el alto índice de afirmaciones que no tienen sustento documental, estadístico y de la realidad que se presta para rumores o afirmaciones que no pueden ser sustentadas. De ahí la necesidad de que el caso de la empresa Drummond Ltda., sea observado permanentemente, para que, en la medida en que se produzcan decisiones oficiales, se pueda establecer la verdad en torno de este caso. Sin

³ “Los cambios en la estructura de los mercados de trabajo y en las relaciones laborales han dado lugar a cambios repentinos en la reorganización de las inspecciones del trabajo. En particular, los inspectores del trabajo tienen que responder de un modo más eficiente, garantizando el cumplimiento de las normas, a través de medidas preventivas, asesoramiento y detección de infracciones de la ley laboral. Algunos de esos cambios –incluyendo subcontratación, externalización empresarial e incremento del trabajo no declarado o ilegal– están ligados al surgimiento de nuevos modelos de negocio y modos de producción, a la globalización y a una creciente migración laboral, así como a los avances tecnológicos” (Oficina Internacional del Trabajo, 2011).

embargo, el esfuerzo que se ha hecho en el presente texto es precisamente documentar la violación de los estándares internacionales en el mundo de la responsabilidad social empresarial por parte de la citada empresa, siendo a ella a quien le corresponde la carga de la prueba de desmentir muchas de las afirmaciones que se han venido tejiendo alrededor del incumplimiento de los estándares aquí analizados.

El Estado colombiano⁴, quien es el responsable directo por la violación de estos estándares de la empresa Drummond y, sobre todo, de los convenios internacionales en materia del mundo del trabajo y de derechos humanos, tiene la obligación imperativa de ejercer de inmediato un mayor control sobre el sector minero colombiano, dada la importancia que éste tiene en el desarrollo social y económico del país.

En Colombia se han iniciado acciones para establecer la responsabilidad acerca del desconocimiento de los estándares antes mencionados. No obstante, la gobernanza (Russi y Muradián, 2003) en Colombia es débil, pues sólo basta analizar los indicadores de Latinobarómetro para ver que el Estado colombiano tiene niveles de confianza muy bajos con relación a otros países de América Latina. Por eso es necesario generar una denuncia internacional frente a los diferentes organismos e instituciones que directa o indirectamente guarden relación con el mercado y con los aspectos socio-laborales y ambientales, en razón de que no existe una estructura jurídica internacional que permita imputar responsabilidad a las empresas transnacionales y a otras empresas comerciales por violación de los derechos humanos, como son los que en Colombia, en términos generales, se están violando.

Se recomienda que desde la organización sindical de la empresa Drummond⁵ – Sintramienergética– se pueda denunciar internacionalmente esta situación tanto ante la OIT como ante el Comité de Libertad Sindical, la OCDE (punto nacional de contacto, ubicado en

⁴ En conferencia de Eduardo Guerrero (asesor de la Alta Consejería Presidencial para la Gestión Ambiental, Biodiversidad, Agua y Cambio climático), en Medellín el 2 de septiembre de 2011, Séptima Reunión Colombia Minera, manifestó que el Estado colombiano está ejerciendo un control sobre la minería en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, y que está estructurando y fortaleciendo la institucionalidad ambiental y, en definitiva, fortaleciendo la gobernanza del sector minero colombiano.

⁵ En la empresa Drummond existen dos sindicatos: Sintramienergética, que cobija a 75% de los trabajadores, y Sintradrummond, que capta 15% de ellos. El resto de los trabajadores (10%) no se encuentra afiliado a ninguna organización sindical. También existe una asociación de trabajadores enfermos de la Drummond (ASOTREDP).

la dirección de inversión extranjera y servicios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) y los tribunales y operadores nacionales que tengan como función el control de los estándares mencionados.

Bibliografía principal

Arcand, Sébastien; Muñoz Grisales, Facal Rodrigo; Dupuis, Joseph y Pierre Jean (2010). *Sociología de la empresa: del marco histórico a las dinámicas internas*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Universidad EAFIT, Universidad del Valle.

Bonilla Mejía, Leonardo (2011). “Dimensión regional de la desigualdad en Colombia”. En: *Reportes del Emisor*. Banco de la República, diciembre, No. 151. Tomado de: http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/report_emisor/2011/151.pdf

Chihu Amparan, Aquiles (coord.) (2006). *El análisis de los marcos en la sociología de los movimientos sociales*. México D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.

Fernández, Encarnación (2009). *¿Estados fallidos o Estados en crisis?* Granada: Colmenares.

Goffman, Erving (2003). *Estigma: la identidad deteriorada*. Buenos Aires: Amorrortu.

Guarnizo, Carlos José; Mejía, Oswaldo y Durán, Benjamín (2009). *Hacia unas mejores relaciones laborales: Lecciones y experiencias de 8 casos colombianos*. Bogotá: OIT.

Levi, Lucio (2011). “Gobernar la globalización”. En: *Archivos del presente*. Buenos Aires: Fundación Foro del Sur, año 15, No. 55.

OCDE (2011). *Guidelines for multinational enterprises*. Tomado de: <http://www.oecd.org/dataoecd/43/29/48004323.pdf>

Oficina Internacional del Trabajo. (2002). *Guía para la Declaración Tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social*. Suiza: OIT.

Procuraduría General de la Nación (2008). *La explotación del carbón en el Cesar*. Bogotá: Imprenta Nacional.

Rotberg, Robert; Clapham, Christopher y Herbst, Jeffrey (2007). *Los Estados fallidos o fracasados: un debate inconcluso y sospechoso*. Trad. Carlos Morales de Sétien Ravina. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.

Russi, Daniela y Muradian, Roldan (2003). *Gobernanza global y responsabilidad ambiental*. Barcelona: Icaria, 2003. Tomado de:

Sarmiento Palacio, Eduardo (2008). *Economía y globalización*. Bogotá: Norma.

Sierra Bravo, Restituto (2005). *Técnicas de investigación social: teorías y ejercicios*. (14ª ed.) Madrid: Thomson.

Suárez Montoya, Aurelio (2010). *Confianza inversionista: economía colombiana, primera década del siglo XXI*. Colombia: Ediciones Aurora.

Tokatlian, Juan Gabriel (2009). “La construcción de un Estado fallido en la política mundial: el caso de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia”. En: HIRST, Mónica (Comp.) *Crisis del Estado e intervención internacional*. Buenos Aires: Edhasa.